



Asamblea General

Distr. general
5 de agosto de 2024
Español
Original: inglés

Septuagésimo noveno período de sesiones

Tema 71 c) del programa provisional*

**Promoción y protección de los derechos humanos:
situaciones de los derechos humanos e informes
de relatores y representantes especiales**

Situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea

Informe del Secretario General

Resumen

Este informe se presenta de conformidad con la resolución [78/218](#) de la Asamblea General, relativa a la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea. En él se ofrece información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en el país desde julio de 2023 hasta mayo de 2024, así como un resumen de la colaboración del Gobierno de la República Popular Democrática de Corea con las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos.

* [A/79/150](#).



I. Introducción

1. Este informe se presenta de conformidad con la resolución 78/218 de la Asamblea General, relativa a la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea. Proporciona información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en el país desde el 1 julio de 2023 hasta el 31 de mayo de 2024.
2. El 22 de julio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) envió una nota verbal a la Misión Permanente de la República Popular Democrática de Corea ante las Naciones Unidas en Ginebra en la que invitaba al Gobierno a presentar observaciones basadas en hechos sobre el proyecto de informe. No se recibió respuesta alguna.
3. Según datos del Ministerio de Unificación de la República de Corea, en 2023 entraron en la República de Corea 196 personas huidas de la República Popular Democrática de Corea (32 hombres y 164 mujeres). Cuarenta y tres de ellas (8 hombres y 35 mujeres) entraron presuntamente en la República de Corea durante el primer trimestre de 2024, mientras que en 2022 fueron 67, en 2021 fueron 63, en 2020 entraron 229 y en 2019 entraron 1.047¹. Durante el período que abarca el informe, la mayoría de las personas que llegaron al país habían abandonado la República Popular Democrática de Corea antes de que esta cerrara sus fronteras en enero de 2020 en respuesta a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). Un número considerable de las personas huidas de la República Popular Democrática de Corea que llegaron a la República de Corea en 2023 eran funcionarios del gobierno, trabajadores en el extranjero y estudiantes internacionales que vivían desde hacía años en terceros países. Trece personas viajaron directamente desde la República Popular Democrática de Corea a la República de Corea en barco.

II. Contexto político

4. La situación de la seguridad en la península de Corea siguió siendo tensa durante el período en cuestión, sin que se produjeran avances en las relaciones entre las dos Coreas ni en lo que respecta a la desnuclearización. La República Popular Democrática de Corea siguió reforzando sus programas nuclear² y de misiles con el lanzamiento experimental de varios misiles balísticos³ y satélites de reconocimiento militar⁴. La Constitución del país se modificó en septiembre de 2023 para plasmar en ella su política sobre armas nucleares⁵. El 23 de noviembre de 2023, el Gobierno anunció la suspensión total de la aplicación del acuerdo militar de carácter general suscrito en 2018 con la República de Corea⁶.
5. Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Seguridad celebró cinco sesiones públicas sobre la República Popular Democrática de Corea para discutir

¹ República de Corea, Ministerio de Unificación, situación reciente de las llegadas al país, disponible en: <https://www.unikorea.go.kr/unikorea/business/NKDefectorsPolicy/status/lately/>.

² Informe del Grupo de Expertos establecido en virtud de la resolución 1874 (2009) (véase S/2024/215).

³ *Ibid.* Según el Grupo de Expertos, la República Popular Democrática de Corea lanzó en 2023 al menos 33 misiles balísticos y misiles que combinaban tecnologías balísticas y de guía, una cifra inferior a los 73 lanzamientos realizados en 2022.

⁴ *Ibid.*

⁵ KCNA Watch, “Respected comrade Kim Jong Un makes speech at 9th session of 14th SPA”, 28 de septiembre de 2023.

⁶ La República Popular Democrática de Corea y la República de Corea firmaron el acuerdo de paz general en septiembre de 2018 para reducir las tensiones militares en la península de Corea. La República de Corea también suspendió totalmente el acuerdo en junio de 2024.

acerca del lanzamiento experimental de misiles y sus implicaciones para la paz y la seguridad internacionales⁷. El Secretario General ha instado en varias ocasiones a la República Popular Democrática de Corea a que cumpla plenamente las obligaciones internacionales que le incumben con arreglo a todas las resoluciones pertinentes del Consejo y reanude el diálogo sin condiciones previas para lograr una paz sostenible y la desnuclearización completa y verificable de la península de Corea⁸. En agosto de 2023, el Consejo celebró una reunión informativa abierta sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea por primera vez desde el 22 de diciembre de 2017.

6. El 28 de marzo de 2024, el Consejo de Seguridad decidió no aprobar el proyecto de resolución con el que se pretendía prolongar la duración del mandato del Grupo de Expertos que ayudaba al Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución [1718 \(2006\)](#) a supervisar y documentar la aplicación de las sanciones de las Naciones Unidas contra la República Popular Democrática de Corea⁹.

7. En agosto de 2023, después de abrir parcialmente sus fronteras tras haber permanecido cerradas desde enero de 2020, la República Popular Democrática de Corea reanudó sus relaciones internacionales enviando a altos funcionarios del Gobierno a países vecinos y a otros lugares. Aunque la mayoría de las embajadas y misiones, incluido el equipo de las Naciones Unidas en el país, no pudieron regresar al país durante el período en cuestión, sí lo hicieron los embajadores y el personal diplomático de un reducido número de Estados Miembros.

III. Sinopsis de la situación de los derechos humanos

A. El derecho a una alimentación adecuada

8. Tanto las Naciones Unidas como sus órganos independientes han planteado continuamente su preocupación por el acceso de la población a una alimentación adecuada en la República Popular Democrática de Corea. Según el informe del Grupo de Expertos establecido en virtud de la resolución [1874 \(2009\)](#) del Consejo de Seguridad, se han producido varios acontecimientos positivos en el segundo semestre de 2023, entre ellos una disminución de los precios de los alimentos al nivel de 2019 gracias a una “buena cosecha de otoño de una serie de cultivos diferentes” y la “normalización” parcial de las importaciones de alimentos y bienes de consumo, así como el aumento de algunos tipos de asistencia humanitaria vital¹⁰.

9. Según un informe conjunto elaborado recientemente por las Naciones Unidas, la inseguridad alimentaria afecta a casi la mitad de la población de la República Popular Democrática de Corea, que además necesita ayuda¹¹. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) informó de que la escasez de alimentos seguía siendo preocupante, ya que más del 4 % de los niños a quienes se examinó

⁷ Naciones Unidas, Biblioteca Dag Hammarskjöld, “UN Security Council meetings & outcomes tables”, 2023 y 2024.

⁸ Declaración atribuida al Portavoz del Secretario General sobre el lanzamiento de un satélite con tecnología de misiles balísticos por parte de la República Popular Democrática de Corea, 24 de agosto de 2023.

⁹ Naciones Unidas, “General Assembly debates Russia’s veto of DPR Korea sanctions panel”, 11 de abril de 2024.

¹⁰ Véase [S/2024/215](#).

¹¹ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) et al., *El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2023: Urbanización, transformación de los sistemas agroalimentarios y dietas saludables a lo largo del continuo rural-urbano* (Roma, FAO, 2023), pág. 171.

entre enero y junio de 2023 en centros de tratamiento de varias provincias presentaban una emaciación grave o moderada, una tasa superior a la registrada antes de 2020. El UNICEF comprobó que los centros no estaban adecuadamente abastecidos de medicamentos, fármacos, vacunas y artículos médicos fungibles, y que los profesionales médicos carecían de los conocimientos y la capacidad necesarios en relación con los protocolos establecidos para tratar la malnutrición y las enfermedades infantiles¹².

10. A partir de la información obtenida en las entrevistas realizadas por el ACNUDH, se puede concluir que, durante el período que abarca el informe, es posible que hubiera habido hambruna en algunas partes del país. Pero seguía siendo difícil determinar la gravedad del problema porque la información disponible era muy limitada debido a la disminución del número de personas huidas del país y a las nuevas restricciones impuestas al flujo de información¹³. Varios informes apuntan a un aumento de los alimentos importados de China y la Federación de Rusia después de que la República Democrática Popular de Corea abriera parcialmente sus fronteras en el mes de agosto¹⁴. Según algunas fuentes, el Gobierno había prestado más atención a los medios de subsistencia, la agricultura y la alimentación, llegando en ocasiones a proporcionar más raciones y alimentos subvencionados a ciertas familias¹⁵. El presidente Kim Jong Un se ha referido en repetidas ocasiones a la necesidad de mejorar el nivel de vida de la población y priorizar la producción agrícola y cómo solucionar la escasez de alimentos¹⁶.

11. Aunque parecía que el Gobierno estaba tratando de resolver la situación alimentaria, al mismo tiempo limitó el papel de los *jangmadang* (mercados a pequeña escala) en la distribución de alimentos, lo que se tradujo en una producción, distribución y consumo de alimentos cada vez más centralizados a nivel nacional. De las entrevistas realizadas por el ACNUDH se desprende que la población solo podía comprar alimentos básicos en tiendas propiedad del Estado, que a su vez no tenían suficientes alimentos a la venta, en lugar de acudir a los *jangmadang*, como se había hecho antes de la pandemia, limitando más si cabe el acceso a los alimentos. Esto afectó al disfrute del derecho a una alimentación adecuada entre la población, ya que se enfrentaba a trabas físicas y económicas para obtener alimentos, incluidos los medios para comprarlos.

12. La situación hace temer que pueda violarse el derecho a una alimentación adecuada. En virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que la República Popular Democrática de Corea es parte, los Estados partes tienen unas obligaciones básicas mínimas que cumplir, también en lo que respecta al derecho a una alimentación adecuada¹⁷. Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, si un Estado no puede cumplir estas obligaciones por no disponer de los recursos necesarios, debe demostrar que ha hecho todo lo posible por utilizar los recursos a su alcance para tratar de cumplir esas obligaciones

¹² UNICEF, “East Asia and Pacific region”, Humanitarian Situation Report núm. 2, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, 2 de febrero de 2024.

¹³ Benjamin Katzeff Silberstein, “North Korean market prices suggest serious food shortages”, 38North, 23 de junio de 2023.

¹⁴ Ifang Bremer, “Food imports help drive North Korean trade with China to three-year high”, NKNews, 24 de marzo de 2023; Anton Sokolin, “Surge in North Korean grain imports lays bare deepening hunger crisis”, NKNews, 2 de agosto de 2023.

¹⁵ KCNA Watch, “Report on 8th enlarged plenary meeting of 8th WPK Central Committee”, 19 de junio de 2023.

¹⁶ KCNA Watch, “Immortal leadership for agricultural development of the country”, 12 de noviembre de 2023.

¹⁷ Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 11. Véase también Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, observación general núm. 12 (1999).

mínimas con carácter prioritario. El Comité destacó que, aun en tiempos de limitaciones graves de recursos, causadas ya sea por el proceso de ajuste, de recesión económica o por otros factores, se puede y, de hecho, se debe proteger a los miembros vulnerables de la sociedad mediante la adopción de programas de relativo bajo costo¹⁸. Según el Comité, los Estados deben evitar impedir el acceso a la ayuda alimentaria humanitaria en situaciones de emergencia¹⁹. La comunidad internacional también es responsable de cooperar con la prestación de ayuda humanitaria²⁰.

B. Libertad de expresión

13. Durante el período que abarca el informe se observó un considerable aumento de la represión de los derechos a la libertad de expresión, información, pensamiento y conciencia. Desde que comenzó la pandemia, la República Popular Democrática de Corea ha promulgado varias leyes para regular el flujo de información procedente del exterior y los contenidos difundidos por medios de comunicación extranjeros, reforzar los controles existentes e imponer penas más duras a los infractores²¹. Al aprobarse estas leyes, el ACNUDH recibió numerosas denuncias referidas al aumento de la represión al amparo de estas nuevas leyes durante el período que abarca el informe. Aunque se promulgaron justo antes del período en cuestión, el texto íntegro de estas leyes no se publicó hasta principios de 2023, gracias a lo cual pudieron analizarse en el presente informe²².

14. El objetivo de la Ley de protección de la lengua cultural de Pyongyang es salvaguardar el carácter nacional independiente y distintivo de la lengua de la República Popular Democrática de Corea frente a las variantes del dialecto coreano que se hablan en otros lugares. Varias disposiciones de esta ley suscitan dudas en lo que a los derechos humanos se refiere, como la imposición de penas severas, las normas intrusivas que vulneran la privacidad, la responsabilidad parental colectiva y definiciones ambiguas o vagas de las conductas proscritas. La ley trata de afianzar el control sobre el uso de lo que se denomina una “lengua títere”²³ en la vida cotidiana, entre otras cosas aumentando la vigilancia.

¹⁸ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general núm. 3 (1990), párr. 12.

¹⁹ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general núm. 12 (1999), párrs. 19, 37 y 38.

²⁰ *Ibid.*, párr. 38.

²¹ Estas medidas legislativas incluyen la Ley de protección de la lengua cultural de Pyongyang (promulgada el 18 de enero de 2023), la Ley de rechazo al pensamiento y la cultura reaccionarios (de 4 de diciembre de 2020) y la Ley de garantía de la educación de los jóvenes (de 29 de septiembre de 2021). Véanse [A/78/212](#), párrs. 29, 31 y 32, y [A/77/247](#), párrs. 9 y 19.

²² El texto íntegro de las tres leyes no está disponible en el sitio web oficial y accesible del Gobierno de la República Popular Democrática de Corea. El Ministerio de Justicia de la República de Corea publicó el 10 de abril de 2023 la Ley de garantía de la educación de los jóvenes (véase www.unilaw.go.kr). Un medio de comunicación publicó la versión no oficial de la Ley de rechazo al pensamiento y la cultura reaccionarios y la Ley de protección de la lengua cultural de Pyongyang los días 21 y 23 de marzo de 2023, respectivamente (véanse https://www.dailynk.com/english/wp-content/uploads/sites/2/2023/03/Pyongyang-Cultural-Language-Protection-Act_English-and-Korean-Versions_Daily-NK.pdf; https://www.dailynk.com/20230321-4/#flipbook-df_298183/5/). El Ministerio de Unificación de la República de Corea se ha servido de estos textos para realizar su análisis. Véase el informe de 2024 sobre los derechos humanos en Corea del Norte, disponible en <https://unikorea.go.kr/nkhr/ko/ebook/index.html>, págs. 52 a 61.

²³ La Ley define la “lengua títere” como aquella que ha perdido su esencia coreana por medio de la occidentalización, japonización o sinización, y la califica de “lengua basura, vulgar y repugnante”. En declaraciones oficiales, la República Popular Democrática de Corea emplea habitualmente el término “títere” para referirse a la República de Corea.

15. La ley permite que el Gobierno instale programas de vigilancia patrocinados por el Estado en dispositivos electrónicos y redes personales (art. 30), impone una educación y una vigilancia más estrictas a las personas que viajan al extranjero por negocios para garantizar que no traigan a su regreso “propaganda ilegal” (art. 12) y establece sanciones penales y administrativas por emplear la “lengua títere” (arts. 58 a 64).

16. La Ley de garantía de la educación de los jóvenes destaca el papel y la responsabilidad de la juventud en la “defensa del socialismo” (art. 5) mediante la adopción de “un estilo de vida socialista” (art. 37), y aboga por reforzar la educación y las medidas de tipo normativo para garantizar su cumplimiento. Algunas conductas prohibidas son participar en “actividades religiosas y supersticiosas”, “introducir, producir, copiar, almacenar, distribuir o consumir publicaciones propagandísticas impuras” o cantar canciones que sean contrarias a las costumbres del país (art. 41). La Ley obliga a los “organismos públicos, incluidos la fiscalía y los órganos de la seguridad social” a educar sobre el cumplimiento de la ley y el control legal (art. 43).

17. Con la Ley de rechazo al pensamiento y la cultura reaccionarios se busca reforzar los controles de vigilancia para impedir “la introducción o difusión de un pensamiento o una cultura reaccionarios y antisocialistas” (art. 1). Las penas previstas por delitos tipificados en los artículos 27 a 40 constituyen en ocasiones castigos extremadamente desproporcionados, como la cadena perpetua o la pena de muerte por difundir contenidos reaccionarios. Los delitos punibles en virtud de estas disposiciones son, entre otros, la difusión de una ideología y una cultura “títere” o procedente de un país hostil. Queda prohibido asimismo reproducir materiales para difundir una “ideología y una cultura reaccionarias” o acceder a “material propagandístico impuro” empleando dispositivos electrónicos y radio, o un teléfono móvil sin un programa que los bloquee.

18. Las personas que tengan conocimiento de estos delitos y no los denuncien también pueden ser castigadas. Las autoridades del Estado pueden ser castigadas por no imponer una censura, supervisión y control adecuados, también en las inspecciones aduaneras, o por la educación y el control irresponsables de empleados y estudiantes que no impidan la introducción de “ideologías y culturas reaccionarias”. Entre las penas previstas para castigar estos delitos figuran multas, el cierre de empresas, la confiscación de bienes, el despido, el trabajo no remunerado, la disciplina mediante el trabajo, la reforma mediante el trabajo por un plazo definido o indefinido y la pena de muerte.

19. En su informe nacional para el examen periódico universal de 2019, la República Popular Democrática de Corea indicó que su legislación protegía el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión y al acceso a la información²⁴. Sin embargo, el contenido y la aplicación de las tres leyes aprobadas recientemente parecen interferir de manera indebida y desproporcionada con la libertad de expresión de las personas, aumentan el control del Estado sobre su población y vulneran su derecho a acceder a la información procedente del exterior. Las restricciones a la expresión lingüística de la población y al acceso a la información son ejemplos que ilustran la dura represión que se ejerce en el país sobre el derecho a la libertad de expresión.

20. Restricciones como estas vulneran el derecho a la intimidad, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y a la libertad de expresión, tal como prevén los artículos 17 a 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que la República Popular Democrática de Corea es parte. La libertad de opinión y expresión es un derecho fundamental garantizado por el artículo 19 del Pacto y

²⁴ A/HRC/WG.6/33/PRK/1, párr. 30.

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

21. Por otra parte, estas tres leyes prevén sanciones administrativas y penales para padres y madres por el comportamiento de sus hijos. La Ley de protección del lenguaje cultural de Pyongyang prevé multas (art. 60) o condenas de tres meses como mínimo de “educación mediante el trabajo” para los progenitores de hijos reincidentes (art. 61). La Ley obliga a avergonzar públicamente a los padres en reuniones (art. 33). La Ley de rechazo al pensamiento y la cultura reaccionarios prevé multas para los progenitores que no eduquen a sus hijos en contra del pensamiento y la cultura reaccionarios (art. 37 4)). Castigar a una persona por los actos cometidos por terceros puede constituir un castigo colectivo que vulnera las garantías procesales contempladas en el derecho internacional de los derechos humanos.

22. La introducción de la pena de muerte para castigar algunos de estos delitos y el carácter extremo de las medidas empleadas para reprimir la libertad de expresión suscitan gran preocupación en lo que respecta a la permisibilidad y proporcionalidad de estos castigos conforme al derecho internacional de los derechos humanos. En virtud de la Ley de protección de la lengua cultural de Pyongyang y de la Ley de rechazo al pensamiento y la cultura reaccionarios, las penas impuestas por difundir la “lengua títere” o la “cultura reaccionaria” son más duras que las previstas en caso de homicidio doloso o los llamados delitos contra el Estado tipificados en el derecho penal²⁵. Por ejemplo, el artículo 6 de la Ley de protección del lenguaje cultural de Pyongyang estipula en términos generales que quien repita o difunda la “lengua títere” se enfrentará a importantes sanciones legales, incluida la pena de muerte, con independencia de cuán grave sea el asunto. Con arreglo al artículo 7 de la Ley de rechazo al pensamiento y la cultura reaccionarios, el Estado impondrá severas sanciones legales, incluida la pena capital, a toda persona que cometa el delito de introducir, ver o difundir la cultura reaccionaria, sea cual sea su condición. Expertos de las Naciones Unidas han planteado estas preocupaciones al Gobierno, afirmando que la ley impone restricciones inadmisibles a la libertad de opinión y expresión y al derecho a participar en la vida cultural²⁶.

23. Los informes que recibió el ACNUDH sugieren que las leyes se habían aplicado activamente desde que fueron promulgadas. Al parecer, se condenó a dos jóvenes de 16 años a 12 años de prisión después de un juicio público celebrado en Pyongyang por ver y difundir contenidos producidos en la República de Corea, infringiendo así la Ley de rechazo al pensamiento y la cultura reaccionarios²⁷. Una de las personas huidas de la República Popular Democrática de Corea a la que entrevistó el ACNUDH declaró haber presenciado la ejecución pública de varias personas acusadas de infringir la Ley de rechazo al pensamiento y la cultura reaccionarios²⁸.

24. En su resolución 55/21, el Consejo de Derechos Humanos instó al Gobierno a que derogara o reformara toda práctica o ley que reprimiera la libertad de expresión

²⁵ Ley Penal de la República Popular Democrática de Corea (2022), arts. 61, 62 y 305.

²⁶ El 23 de agosto de 2021, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión enviaron una comunicación conjunta al Gobierno de la República Popular Democrática de Corea (véase OL PRK 5/2021).

²⁷ South and North Development, “North Korean high school students sentenced to 12 years of hard labor for watching South Korean content”, 8 de diciembre de 2023, disponible en <https://sand.or.kr/kr/opinion/plan.php?bgu=view&idx=22962>; véanse también <https://www.bbc.com/news/world-asia-68015652>; <https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7871025>.

²⁸ Entrevistas realizadas por el ACNUDH.

y opinión, refiriéndose concretamente a las tres leyes en cuestión. La Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea expresó su preocupación por el hecho de que “los requisitos estrictamente prescritos por el Gobierno sobre la forma en que las personas deben hablar, comunicarse, interactuar y recibir información limiten aún más el derecho de las personas a la libertad de expresión, incluido el acceso a la información”²⁹ y señaló que las restricciones a la libertad de expresión y otros derechos fundamentales se habían endurecido al promulgarse estas nuevas leyes.

C. Pena de muerte

25. Es muy preocupante que la República Popular Democrática de Corea parezca recurrir cada vez más a la pena de muerte para castigar delitos menores, a pesar de su obligación internacional, como Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que todavía no ha abolido la pena de muerte, de restringir su aplicación para que nadie sea privado de la vida arbitrariamente³⁰. En virtud del artículo 6 del Pacto, el uso de la pena de muerte en los Estados partes que aún no la han abolido está muy limitado, pudiendo aplicarse exclusivamente para castigar los “más graves delitos”, que el Comité de Derechos Humanos ha interpretado como delitos de extrema gravedad que provoquen la muerte de forma directa e intencionada³¹. En el examen periódico universal de 2019, la República Popular Democrática de Corea declaró que la pena de muerte se imponía a las personas condenadas por delitos contra el Estado y a quienes habían cometido “delitos extremadamente graves e imperdonables”³².

26. La Ley penal de la República Popular Democrática de Corea (modificada el 17 de mayo de 2022) enumera 11 delitos que pueden castigarse con la muerte³³. Se han promulgado varias leyes que castigan con la pena capital delitos menores no violentos, incluidas las tres leyes relacionadas con la libertad de expresión ya citadas. La Ley sobre la labor antiepidémica de emergencia³⁴ prevé, entre otras, la pena de muerte en casos graves de negligencia en el cumplimiento de órdenes relacionadas con la labor antiepidémica de emergencia (art. 69), negligencia respecto de las obligaciones relacionadas con el cierre de fronteras (art. 72) y perturbación de la labor antiepidémica de emergencia (art. 73). Por otra parte, la anterior Ley de prevención de epidemias³⁵ contempla la pena de muerte para castigar infracciones “graves” de la ley y para quienes cometan esas infracciones durante una cuarentena de emergencia, que se considera equivalente a una “situación de guerra” (art. 53). Además, la Ley de

²⁹ A/HRC/52/65, párr. 7.

³⁰ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 6.

³¹ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 36 (2018), párr. 35.

³² A/HRC/42/10, párr. 75.

³³ Conspiración para derrocar al Estado (art. 61), actos de terrorismo (art. 62), traición al Estado (art. 63), ultraje a la dignidad de la República (art. 64), sabotaje (art. 65), actos de hostilidad hacia un extranjero (art. 69), traición a la nación (art. 70), cosecha ilegal de adormidera (art. 234), fabricación ilegal de estupefacientes (art. 235), contrabando o venta de estupefacientes (art. 237) y asesinato intencionado con ensañamiento (art. 305). Otros delitos castigados con la pena de muerte son las “formas extremadamente graves” de destrucción de armas o instalaciones militares (art. 1), la sustracción y destrucción de bienes del Estado con alevosía (artículos 2 a 4), la falsificación de moneda (art. 5), el contrabando de metales preciosos (art. 6), la fuga (art. 7), el secuestro (art. 8), la violación (art. 9), el robo de bienes personales (art. 10), y aquellos casos en que una persona cometa varios delitos graves sin que exista la posibilidad de rehabilitación (art. 11) con arreglo a lo dispuesto en la adición a la Ley penal (modificada el 26 de octubre de 2010).

³⁴ Promulgada el 22 de agosto de 2020. Véase República de Corea, Ministerio de Justicia, base de datos sobre el sistema jurídico de una Corea unificada, disponible en www.unilaw.go.kr.

³⁵ Promulgada el 5 de noviembre de 1997. *Ibid.*

prevención de delitos relacionados con drogas³⁶ castiga con la pena de muerte varios delitos relacionados con estas sustancias.

27. La mayoría de los delitos enumerados anteriormente no parecen figurar entre los “más graves delitos” susceptibles de castigarse con la pena de muerte en virtud del artículo 6 2) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Según el Comité de Derechos Humanos, “los delitos que no desemboquen directa e intencionalmente en la muerte, como la tentativa de asesinato, la corrupción y otros delitos económicos y políticos, el robo a mano armada, la piratería, el secuestro, los delitos relacionados con las drogas y los delitos sexuales, a pesar de revestir gravedad, nunca se podrán invocar, en el marco del artículo 6, para imponer la pena de muerte”³⁷. Además, “en ninguna circunstancia puede aplicarse la pena de muerte para sancionar una conducta cuya penalización en sí misma constituya una vulneración del Pacto”, incluidas las ofensas a un Jefe de Estado³⁸. El Comité ha afirmado que los Estados partes tienen la obligación de examinar constantemente su legislación penal para cerciorarse de que la pena de muerte no se imponga por delitos que no se encuentren entre los más graves³⁹.

28. La República Popular Democrática de Corea proporciona muy poca información sobre cómo aplica la pena de muerte⁴⁰. En la resolución 77/222 de la Asamblea General, se exhortó a todos los Estados que todavía mantenían la pena de muerte a que estableciesen una moratoria de las ejecuciones con miras a abolirla, redujeran el número de delitos por los que se puede imponer la pena de muerte y facilitaran datos pertinentes sobre su uso de la pena de muerte. La República Popular Democrática de Corea votó en contra de la resolución⁴¹.

29. En 2019, durante su tercer examen periódico universal, la República Popular Democrática de Corea indicó que las ejecuciones se llevaban a cabo en público solo en contadas ocasiones y por expresa petición de la familia de la víctima y otras personas afectadas⁴². Sin embargo, según los informes recibidos, el 30 de agosto de 2023 fueron ejecutados públicamente por un pelotón de fusilamiento siete hombres y dos mujeres acusados de matar y traficar con ganado⁴³. Otro hombre fue ejecutado presuntamente por un pelotón de fusilamiento el 25 de septiembre de 2023 por robar medicamentos⁴⁴. El Comité de Derechos Humanos ha declarado que las ejecuciones públicas son contrarias a la prohibición de la tortura⁴⁵ e incompatibles con la dignidad humana⁴⁶, y ha pedido a la República Popular Democrática que abandone esta práctica⁴⁷.

D. Libertad de circulación

30. La República Popular Democrática de Corea volvió a abrir parcialmente sus fronteras en agosto de 2023⁴⁸. Aunque el comercio transfronterizo se ha reanudado en

³⁶ Promulgada el 1 de julio de 2021. *Ibid.*

³⁷ Observación general núm. 36 (2018), párr. 35.

³⁸ *Ibid.*, párr. 36.

³⁹ *Ibid.*, párr. 35.

⁴⁰ A/HRC/45/20, párrs. 9 y 22.

⁴¹ Véase A/77/PV.54.

⁴² A/HRC/42/10, párr. 75.

⁴³ Véase <https://www.asiapress.org/korean/2023/09/society-human-rights/execution/>.

⁴⁴ Véanse https://www.rfa.org/korean/in_focus/food_international_org/medicalthiefexecution-09292023093106.html; <https://www.asiapress.org/korean/2023/10/society-human-rights/execution-2/>.

⁴⁵ Observación general núm. 36 (2018), párr. 40.

⁴⁶ CCPR/C/79/Add.65, párr. 16.

⁴⁷ Véase CCPR/CO/72/PRK.

⁴⁸ KCNA Watch, “Announcement issued by SEEPH [State Emergency Epidemic Prevention

parte, el refuerzo del vallado y la vigilancia de las fronteras ha limitado notablemente la circulación transfronteriza no autorizada de personas⁴⁹.

31. En un informe elaborado por una organización de la sociedad civil que analiza las imágenes satelitales de seis pasos fronterizos, se constató que, desde la pandemia, se había vallado prácticamente toda la frontera con alambre de espino⁵⁰. Además, se crearon o mejoraron las rutas empleadas para patrullar la zona y se construyeron nuevos puestos de guardia y torres de vigilancia. Estas medidas han limitado más si cabe la posibilidad de que los ciudadanos viajen al extranjero.

32. En la República Popular Democrática de Corea, cruzar la frontera nacional sin un certificado de inmigración es un delito tipificado en el derecho penal, ya sea como cruzar ilegalmente la frontera⁵¹ o como traición⁵². Cruzar ilegalmente la frontera se castiga con disciplina mediante el trabajo y, cuando la violación se considera “grave”, con una pena de hasta cinco años de reforma mediante el trabajo⁵³. Cometer traición contra el Estado, por ejemplo huyendo a otro país o desvelando secretos al enemigo, se castiga con al menos cinco años de reforma mediante el trabajo⁵⁴. Cuando se trata de casos graves, se condena a los culpables a una reforma indefinida mediante trabajo forzado o a la pena de muerte con la confiscación de sus bienes⁵⁵. Según las entrevistas realizadas por el ACNUDH, en algunos casos se envía a estas personas a campos de presos políticos (*kwanliso*)⁵⁶, aunque el Gobierno ha negado su existencia.

33. Durante el período que abarca el informe, otros Estados siguieron repatriando a personas por la fuerza a la República Popular Democrática de Corea. Según la información recibida por el ACNUDH, desde el mes de agosto han regresado centenares de personas procedentes de China⁵⁷. De los datos recopilados a lo largo de muchos años por el ACNUDH sobre casos individuales, se desprende que las personas repatriadas se enfrentan a un verdadero riesgo de ser torturadas, detenidas arbitrariamente o víctimas de otras violaciones graves de los derechos humanos⁵⁸.

34. También se siguió restringiendo la libertad de circulación dentro del país. Parece ser que, desde el brote de la COVID-19, el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea ha complicado el proceso de autorización de viaje, ha expedido un reducido número de permisos para viajar y ha aumentado los controles sobre los viajes en el territorio nacional⁵⁹.

Headquarters]”, 28 de agosto de 2023. Disponible en <https://kcnawatch.org/newstream/1693242631-11328803/announcement-issued-by-seeph/>.

⁴⁹ Ifang Bremer, “Barrier to entry: new photos show China expanding fences on North Korea border”, NKNews, 7 de diciembre de 2023.

⁵⁰ Human Rights Watch, *A Sense of Terror Stronger than A Bullet: The Closing of North Korea 2018-2023* (2024), págs. 32 a 72.

⁵¹ Art. 260.

⁵² Art. 63.

⁵³ Art. 260.

⁵⁴ Art. 63.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ A/HRC/40/36, párr. 38.

⁵⁷ ACNUDH, “China must not forcibly repatriate North Korean escapees: UN experts”, comunicado de prensa, 17 de octubre de 2023.

⁵⁸ Presentación oral de información actualizada por parte de la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos al Consejo de Derechos Humanos de conformidad con la resolución 52/28, 20 de marzo de 2024. Véase también A/HRC/46/52, párr. 49.

⁵⁹ Entrevistas realizadas por el ACNUDH.

E. Trabajadores en el extranjero

35. Durante el período que abarca el informe, el ACNUDH entrevistó a varias personas, en su mayoría hombres, que el Estado había enviado a trabajar en el extranjero⁶⁰. Varios de los entrevistados declararon haber sido enviados al extranjero a principios o mediados de la década de 1990, otros entre 2015 y 2019. Todos habían escapado de su lugar de trabajo y permanecido en el Estado de acogida hasta que viajaron a la República de Corea. La mayoría de los trabajadores en el extranjero realizaban actividades físicamente exigentes, como la construcción o la tala de árboles. Los entrevistados proporcionaron información muy coherente con informes anteriores sobre las condiciones laborales de los trabajadores en el extranjero, que podrían constituir una forma de trabajo forzoso⁶¹.

36. Las personas entrevistadas explicaron que el proceso de selección para trabajar en el extranjero dependía de los buenos contactos, un buen entorno familiar y, sobre todo, del pago de sobornos. Estaba prohibido enviar al extranjero a determinadas categorías de personas, como licenciados universitarios o personas que hayan trabajado en sectores críticos para el Estado.

37. Los trabajadores en el extranjero afirmaron que se imponían estrictos controles sobre la correspondencia, la privacidad y el acceso a la información, restringiéndose por ejemplo el uso de teléfonos o el consumo de medios de comunicación no autorizados, controles parecidos a los que se ejercen dentro de la República Popular Democrática de Corea. Los trabajadores eran continuamente vigilados y las infracciones se sancionaban con dureza, en algunos casos con la repatriación. En ciertos lugares de trabajo, funcionarios del Ministerio de Seguridad del Estado de la República Popular Democrática de Corea⁶² realizaban controles nocturnos para asegurarse de que los trabajadores no accedieran a medios de comunicación prohibidos. Sumada al intenso trabajo que realizaban, esta vigilancia creaba un ambiente parecido al de una cárcel. A los trabajadores se les permitía enviar cartas a casa, a sabiendas de que serían controladas por funcionarios del Estado; motivo por el cual la correspondencia con la familia era limitada⁶³. Sin embargo, algunas de las personas huidas afirmaron que accedían en secreto a Internet o a medios de comunicación extranjeros y se informaban sobre lo que sucedía en el mundo exterior⁶⁴. Los entrevistados denunciaron sistemáticamente sus duras condiciones de vida y laborales⁶⁵, llegando en algunos casos a tener que dormir en sus lugares de trabajo en cualquier espacio seco disponible, sin instalaciones para lavarse ni agua potable, o viéndose obligados a sacar ropa de invierno de la basura⁶⁶.

38. Los entrevistados afirmaron que fueron explotados y mencionaron la falta general de transparencia en salarios y pagos. El Estado se quedaba con gran parte de sus salarios (hasta el 70 %), con lo que apenas les quedaba lo suficiente para sobrevivir o enviar dinero a sus familias. Estos pagos incluían el importe correspondiente al reembolso de los gastos de traslado al extranjero y comida, entre otros. Los trabajadores también tenían que hacer otras “contribuciones” al Estado, por lo que algunos se endeudaban más de la cuenta y no podían saldar sus deudas. Se pedía a los trabajadores que hicieran aportaciones para fines concretos, como “suministros por daños ocasionados por inundaciones”, “regalos como muestra de

⁶⁰ A/78/212, párr. 16.

⁶¹ *Ibid.*, párrs. 16 a 18.

⁶² Según los entrevistados, el Ministerio de Seguridad del Estado estaba casi siempre presente en los lugares de trabajo y se encargaba de vigilarlos y de que cumplieran las normas.

⁶³ Entrevistas realizadas por el ACNUDH.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ A/78/212, párr. 16.

⁶⁶ Entrevistas realizadas por el ACNUDH.

lealtad” durante los congresos del Partido, para construir un hospital en Pyongyang o para ayudar al ejército⁶⁷.

39. Los trabajadores en el extranjero no podían negociar mejores salarios o condiciones. Tampoco podían renunciar libremente a su puesto ni marcharse a trabajar a otro lugar. Los trabajadores en el extranjero temían que, si cometían cualquier acto de desobediencia en el trabajo, podrían ser detenidos y enjuiciados, y sus familias deportadas a regiones remotas⁶⁸.

40. Según la información recibida, a raíz de las medidas adoptadas para combatir la COVID-19 en los Estados de acogida y del cierre de las fronteras de la República Popular Democrática de Corea, un gran número de trabajadores quedaron varados en los Estados de acogida, sin poder regresar a su país. Estas personas también se enfrentaron a dificultades adicionales para ganarse la vida a causa de las medidas adoptadas por los Estados de acogida para combatir la COVID-19, como una mayor vigilancia, controles de identidad y restricciones a la circulación. También temían ser detenidas y encarceladas. Se aludió a esta vulnerabilidad como principal motivo por el que decidieron huir a la República de Corea. Algunos entrevistados creían que no podían regresar a la República Popular Democrática de Corea sin correr peligro. Uno de ellos, que vivió en un Estado de acogida durante muchos años tras abandonar el lugar de trabajo que le habían asignado, declaró que nunca podría volver a su país por miedo a ser interrogado, castigado y vigilado de por vida⁶⁹.

41. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales protege los derechos de los trabajadores. En virtud del Pacto, la República Popular Democrática de Corea tiene la obligación de garantizar que estos trabajadores en el extranjero se ganen la vida mediante un trabajo libremente escogido y aceptado, además de tomar medidas para garantizar la plena realización del derecho al trabajo en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona. El Estado está obligado a respetar los derechos de estos trabajadores, absteniéndose de confiscar sus documentos de identidad, retener sus salarios, restringir sus movimientos y amenazarlos. En virtud del artículo 7 del Pacto, el Estado también tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para garantizar que estos trabajadores gocen de su derecho a unas condiciones de trabajo justas y favorables en los países de acogida, incluida una remuneración justa; la seguridad y la higiene en el trabajo; igual oportunidad para todos de ser promovidos; y el descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas.

42. Aunque la República Popular Democrática de Corea no es miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los convenios de la OIT son una fuente autorizada y reconocida internacionalmente en cuestiones laborales, incluida la definición de trabajo forzoso. La OIT ha publicado una lista de indicadores de trabajo forzoso, como son el abuso de la vulnerabilidad; la retención de los documentos de identidad; el engaño; la retención de salarios; la restricción de movimiento; la servidumbre por deudas; el aislamiento; condiciones de trabajo y de vida abusivas; la violencia física y sexual; el exceso de horas extras; e intimidación y amenazas. La OIT aclara que “la presencia de un solo indicador en una situación dada en algunos casos puede implicar la existencia de trabajo forzoso. Sin embargo, en otros casos, es posible que sea preciso buscar varios indicadores que, en conjunto, apuntan a un caso de trabajo forzoso. En general, el conjunto de los 11 indicadores cubre los principales elementos posibles de una situación de trabajo forzoso, y por lo tanto proporciona la

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

base para evaluar si un trabajador es víctima de este delito”⁷⁰. En este sentido, las condiciones descritas por los antiguos trabajadores en el extranjero parecen apuntar a una situación de trabajo forzoso que se ajusta a la definición de la OIT.

F. Rendición de cuentas

43. Durante el período en cuestión, el ACNUDH siguió recopilando, consolidando, analizando y conservando datos y pruebas para sentar las bases de futuras vías mediante las cuales rendir cuentas de violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales cometidos en la República Popular Democrática de Corea. Esto incluye información recopilada de diversas fuentes, como entrevistas con víctimas, testigos y expertos, informes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, fotografías, mapas e imágenes satelitales. Los datos recogidos se analizan teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de la República Popular Democrática de Corea en materia de derechos humanos y el marco jurídico penal internacional aplicable.

44. La información recopilada se almacena de forma segura en el registro central de pruebas e información del ACNUDH, tal como dispone la resolución 34/24 del Consejo de Derechos Humanos. Este registro será clave para facilitar y agilizar en lo sucesivo investigaciones y procedimientos judiciales justos e independientes en relación con violaciones graves de los derechos humanos y posibles crímenes internacionales ante los tribunales nacionales o internacionales competentes. Las iniciativas de conservación se ajustan a las mejores prácticas de gestión de pruebas para facilitar su uso en posibles enjuiciamientos futuros u otros mecanismos de rendición de cuentas, manteniendo en particular registros seguros y bien organizados de las declaraciones de víctimas y testigos, documentos y otros posibles tipos de pruebas. Por otra parte, el ACNUDH sigue animando a las partes interesadas a que faciliten la información que obre en su poder para conservarla en su registro central. Durante el período en cuestión, varias partes interesadas hicieron importantes contribuciones al registro, incluida una gran biblioteca de información fotográfica del interior del país. El registro cuenta en estos momentos con unos 6.000 elementos.

45. Las conclusiones del análisis realizado por el ACNUDH de la información que consta en el registro coinciden con las de la comisión de investigación sobre los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea hace años, a saber, que seguían cometiéndose graves violaciones de los derechos humanos y posibles crímenes internacionales en el país. Sin embargo, 10 años después de publicarse el informe de la comisión de investigación, no hay indicios de que se haya investigado o procesado a ninguno de los responsables de los delitos señalados por la comisión. Tampoco hay indicios de que la República Popular Democrática de Corea esté investigando estas denuncias, pese a ser la principal responsable de hacerlo.

46. Dada la pasividad de la República Popular Democrática de Corea, es imperativo que se exijan responsabilidades desde otros lugares. En su resolución 78/218, la Asamblea General exhortó al Consejo de Seguridad y a los Estados Miembros a que adoptaran nuevas medidas para garantizar la responsabilidad penal, incluso remitiendo la situación a la Corte Penal Internacional, o que se investigara y enjuiciara a los sospechosos de haber cometido crímenes internacionales en la República Popular Democrática de Corea de conformidad con el derecho internacional en los Estados que pudieran ejercer su jurisdicción sobre tales delitos.

47. El ACNUDH mantiene un diálogo permanente con expertos jurídicos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y Estados para definir y promover

⁷⁰ OIT, “Indicadores del trabajo forzoso”, octubre de 2012.

estrategias eficaces de rendición de cuentas. La Oficina organizó en el mes de febrero una conferencia de expertos para debatir las mejores prácticas mundiales en materia de rendición de cuentas por crímenes internacionales, en el plano tanto judicial como no judicial, y cómo podrían aplicarse al contexto actual de la República Popular Democrática de Corea.

48. En su nota orientativa sobre la justicia transicional, el Secretario General recuerda que, teniendo en cuenta las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos, hay que adoptar una noción más amplia de la justicia, de modo que los elementos de reparación complementen y refuercen los procesos de responsabilidad penal⁷¹. Tanto la comisión de investigación como el grupo de expertos hicieron hincapié en la importancia de que se rindan cuentas en el plano no judicial, por ejemplo mediante las reparaciones y la memorialización, al tiempo que se rinden cuentas en el plano judicial. Promover la rendición de cuentas en todas sus formas es indispensable para defender los derechos humanos de los ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea y de las víctimas procedentes de otros países, tanto dentro como fuera del territorio nacional. También es fundamental hacer justicia a las víctimas de mayor edad de violaciones cometidas hace mucho tiempo, como son las víctimas de desaparición forzada. La rendición de cuentas es asimismo una base necesaria para lograr la paz y la seguridad a largo plazo en la península de Corea.

49. El Secretario General llama a innovar en el diseño y la aplicación de modalidades de justicia no tradicionales, como la reparación, el relato de la verdad y la preservación de la memoria histórica, y de ese modo ofrecer una reparación tangible a las víctimas con la mayor urgencia posible. Las formas creativas de abordar el actual déficit en términos de justicia pueden ser fundamentales para brindar reparación a las víctimas a lo largo de su vida.

IV. Cooperación entre el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea y las Naciones Unidas en relación con la situación de los derechos humanos y la asistencia humanitaria

50. La República Popular Democrática de Corea siguió rechazando la cooperación solicitada en virtud de la resolución [25/25](#) del Consejo de Derechos Humanos, en particular con la estructura sobre el terreno del ACNUDH en Seúl y con la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea. Los titulares de mandatos de procedimientos especiales temáticos no llevaron a cabo ninguna visita durante el período en cuestión y el Gobierno no aceptó ninguna solicitud de visita. No se ha cursado ninguna invitación permanente a los titulares de mandatos de procedimientos especiales.

51. En su resolución [78/218](#), de 19 de diciembre de 2023, relativa a la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea, la Asamblea General destacó que la situación de los derechos humanos en el país, en particular respecto de la igualdad de género y los derechos de todas las mujeres y niñas, está intrínsecamente vinculada a la paz y la seguridad internacionales. La Asamblea alentó las iniciativas diplomáticas, incluido el diálogo y los contactos, para intentar mejorar la situación de los derechos humanos y la situación humanitaria en el país.

52. En la resolución [55/21](#) aprobada por consenso el 4 de abril de 2024, el Consejo de Derechos Humanos solicitó, entre otras cosas, que el Alto Comisionado de las

⁷¹ Naciones Unidas, “Transitional justice: a strategic tool for people, prevention and peace”, nota orientativa del Secretario General, junio de 2023.

Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentara al Consejo, en su 60º período de sesiones, un informe exhaustivo con información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea desde 2014, fecha en que se publicó el informe de la comisión de investigación, y en el que se hiciera un balance de la aplicación de las recomendaciones de la comisión. El Consejo también decidió seguir reforzando la capacidad del ACNUDH, incluida su estructura sobre el terreno en Seúl, dotándolo de más recursos y conocimientos especializados.

53. En noviembre de 2024, la República Popular Democrática de Corea se someterá a examen por cuarta vez en el marco del proceso del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos⁷². Los órganos de derechos humanos han insistido en repetidas ocasiones en la importancia de que se apliquen las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos, incluido el examen periódico universal, para hacer frente a las graves violaciones de los derechos humanos en el país⁷³. No hay organizaciones independientes de la sociedad civil con sede en el país que presenten informes de partes interesadas en el marco del examen periódico universal. El ACNUDH siguió manteniendo contactos periódicos con la Misión Permanente de la República Popular Democrática de Corea ante las Naciones Unidas en Ginebra para debatir y valorar la posibilidad de organizar talleres de seguimiento sobre los mecanismos de derechos humanos, incluida la presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados. El ACNUDH siguió invitando a la República Popular Democrática de Corea a participar en los actos mundiales y regionales pertinentes, como el acto de alto nivel Human Rights 75 celebrado en diciembre de 2023 o el taller subregional de Asia Nororiental sobre empresas y derechos humanos que tuvo lugar en mayo de 2024. La República Popular Democrática de Corea no participó en ninguno de esos eventos.

54. En diciembre de 2023, el Gobierno envió su respuesta⁷⁴ a la lista de cuestiones confeccionada por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad⁷⁵ acerca del informe inicial presentado por el Gobierno en 2018 de conformidad con la Convención⁷⁶. Siguen pendientes de entregar varios informes de la República Popular Democrática de Corea a los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos.

55. El marco estratégico de cooperación entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea para el período 2017-2021 se prorrogó hasta 2025 y siguió vigente durante el período que abarca el informe. A pesar de que las fronteras se abrieron parcialmente en agosto de 2023 y de que aumentaron los intercambios diplomáticos bilaterales, todo el personal humanitario internacional, incluido el de las Naciones Unidas, seguía fuera del país y no se sabía cuándo podría regresar. El equipo de las Naciones Unidas en el país ha estado en contacto con el Gobierno para estudiar la posibilidad de que el personal internacional de los organismos de las Naciones Unidas regrese al país.

56. Al abordar las consecuencias de las sanciones para la situación humanitaria en la República Popular Democrática de Corea, el Grupo de Expertos establecido en virtud de la resolución 1874 (2009) del Consejo de Seguridad concluyó en su informe

⁷² Durante el tercer examen periódico universal, el Gobierno aceptó 132 de las 262 recomendaciones formuladas, comprometiéndose entre otras cosas a colaborar más con el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, mejorar el acceso de los organismos humanitarios que operan en el país a la población afectada o adoptar medidas legislativas y en materia de creación de capacidad para promover y proteger los derechos humanos.

⁷³ Véase la resolución 55/21 del Consejo de Derechos Humanos.

⁷⁴ CRPD/C/PRK/RQ/1.

⁷⁵ CRPD/C/PRK/Q/1.

⁷⁶ CRPD/C/PRK/1.

de febrero de 2024 que, pese a las dificultades para reunir información, no cabía duda de que las sanciones habían afectado de manera no intencionada a la situación humanitaria y algunos aspectos de las operaciones de ayuda, agravando los problemas causados por las políticas económicas ineficaces e ineficientes del país. El Grupo también observó que la influencia relativa de las sanciones había disminuido desde principios de 2020 y que la República Popular Democrática de Corea se había vuelto reacia a aceptar ayuda⁷⁷.

V. Conclusión

57. Aunque en el período que abarca el informe volvieron a abrirse parcialmente las fronteras al exterior, el país permanece en gran medida aislado del resto del mundo. La circulación de personas ha quedado principalmente reducida a las misiones oficiales que entran y salen del país, y cuyo número es limitado. La mayoría de las embajadas, misiones y organizaciones humanitarias extranjeras, así como el personal internacional del equipo de las Naciones Unidas en el país, siguen estando fuera del país. No se respeta el derecho a la libertad de circulación de la mayoría de los ciudadanos, tanto dentro como fuera del territorio nacional.

58. Según las personas huidas a las que entrevistó el ACNUDH, muchos ciudadanos permanecen en el extranjero, si bien están regresando poco a poco. Si se devuelve por la fuerza a quienes abandonaron el país sin permiso, estas personas corren el riesgo de ser torturadas, condenadas arbitrariamente a la pena de muerte y víctimas de otras graves violaciones de los derechos humanos. Este grupo de personas necesita recibir protección inmediata de todos los Estados Miembros. Otro grupo incluye a quienes fueron enviados como trabajadores extranjeros pero quedaron atrapados fuera del país al cerrarse las fronteras. La información facilitada por estos trabajadores sugiere un panorama preocupante caracterizado por una dura y continua represión de los derechos a manos de funcionarios de la República Popular Democrática de Corea en terceros países, lo que podría constituir trabajos forzados y una violación de los derechos humanos, incluido el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

59. La información disponible apunta a una mayor represión de las libertades fundamentales, en particular la libertad de expresión y acceso a la información, fruto de la aplicación de nuevas leyes que limitan considerablemente este derecho e introducen penas muy duras. Un ejemplo es la pena de muerte, que el país aplica a delitos muy diversos que no cumplen los criterios establecidos para los delitos más graves de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. La información también sugiere que se sigue vulnerando el derecho a la alimentación y a la salud de muchas personas en el país. Por otra parte, tampoco se han resuelto algunos casos de secuestros y desapariciones forzadas ocurridos hace mucho tiempo en la República Popular Democrática de Corea o cometidos por esta, tanto dentro como fuera del territorio nacional⁷⁸.

60. No hay indicios de que la República Popular Democrática de Corea esté exigiendo responsabilidades a ninguna persona por violaciones graves de los derechos humanos u otros delitos cometidos en el país, especialmente los que indicó la comisión de investigación en 2014. Aunque hay varias iniciativas internacionales en curso, todavía no han logrado que se rindan cuentas ante la justicia. Las iniciativas de rendición de cuentas en el plano no judicial por parte de Estados Miembros como la República de Corea van en aumento, y hay que apoyarlas y reforzarlas.

⁷⁷ Véase [S/2024/215](#).

⁷⁸ ACNUDH, *“These Wounds Do Not Heal”: Enforced Disappearance and Abductions by the Democratic People’s Republic of Korea* (Ginebra y Seúl, 2023).

61. En este difícil contexto, las Naciones Unidas siguen procurando trabajar con el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea para mejorar la grave situación de los derechos humanos. Algunos indicios positivos sugieren que el país podría aumentar su colaboración con los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, por ejemplo con el examen periódico universal y los órganos de tratados. Es preciso preservar y ampliar estas oportunidades para mantener un diálogo sustancial sobre los derechos humanos.

62. El Secretario General hace nuevamente un llamamiento para que se reduzcan las tensiones y se solucionen de forma pacífica las tensiones militares en la península, tensiones que aumentaron durante el período que abarca el informe. Promover las relaciones diplomáticas en pro de una paz y estabilidad sostenibles en la región y dedicar atención a la situación humanitaria y de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea son medidas que se refuerzan mutuamente.

VI. Recomendaciones

63. El Secretario General recomienda que el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea:

a) Investigue, persiga y lleve ante la justicia a los acusados de haber cometido violaciones de los derechos humanos y se asegure de que las víctimas y sus familias conozcan la verdad sobre las violaciones que se han cometido;

b) Declare una moratoria inmediata sobre el uso de la pena de muerte, seguida tan pronto como sea posible de su abolición, y se asegure de que, hasta que llegue ese momento, la pena de muerte solo se imponga para los delitos más graves y se ajuste a los requisitos previstos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

c) Ponga en libertad a todos los presos políticos, desmantele todos los campos de presos políticos (*kwanliso*) y ponga fin inmediatamente a la detención arbitraria y el encarcelamiento de personas por sus opiniones políticas o de otra índole, reales o percibidas, o por su origen social;

d) Ponga fin de inmediato a la práctica de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en los lugares de reclusión;

e) Acabe con todas las formas de trabajo forzoso, que es contrario al derecho internacional, e introduzca reformas estructurales en el sistema laboral para situar los derechos del trabajador en el centro de ese sistema;

f) Dedique los máximos recursos disponibles a cumplir con las obligaciones fundamentales respecto de cada derecho, tal como dispone el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incluidos los derechos a una alimentación adecuada y al más alto nivel posible de salud física y mental;

g) Facilite el regreso del personal humanitario internacional con acceso libre y sin trabas a todas las poblaciones necesitadas, incluso para supervisar eficazmente la distribución de la ayuda;

h) Proporcione a las familias de todas las personas que hayan sido secuestradas u objeto de desaparición forzada información completa sobre su suerte y paradero si han sobrevivido, permita a los que siguen vivos y a sus descendientes regresar inmediatamente a sus países de origen y, en estrecha cooperación con sus familias y países de origen, identifique y repatrie los restos físicos de quienes hayan fallecido;

i) Permita cuanto antes que los familiares separados se comuniquen entre sí, entre otras cosas empleando la tecnología de videoconferencia e intercambiando cartas;

j) Emprenda sin demora reformas políticas e institucionales para introducir auténticos controles y equilibrios en el poder ejecutivo como medio de garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos;

k) Tome medidas para establecer el estado de derecho y un poder judicial independiente que respete los derechos a un juicio imparcial y al debido proceso, de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

l) Se asegure de que todos los sistemas de vigilancia implantados cumplan las normas de derechos humanos de legalidad, necesidad, proporcionalidad y legitimidad de los objetivos perseguidos, evite su uso como instrumentos de opresión política y garantice que estén sujetos a revisión judicial efectiva;

m) Se adhiera a todos los tratados fundamentales de derechos humanos en los que aún no sea parte, así como a sus protocolos facultativos, acepte los procedimientos de denuncia e investigación previstos en estos tratados y presente los informes pendientes a los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos;

n) Aumente la colaboración con el ACNUDH a fin de formular un programa de actividades de desarrollo de capacidades y asistencia técnica que contribuya a la aplicación de las presentes recomendaciones y las recomendaciones formuladas por todos los mecanismos de derechos humanos, y mantenga a los Estados Miembros informados de las medidas adoptadas para ponerlas en práctica;

o) Colabore de manera constructiva con los interlocutores internacionales a fin de promover, con carácter prioritario, mejoras concretas en la situación de los derechos humanos sobre el terreno, entre otras cosas, mediante diálogos sobre los derechos humanos; visitas oficiales al país que incluyan un acceso adecuado para evaluar plenamente las condiciones en materia de derechos humanos; iniciativas de cooperación, y mayores contactos interpersonales.

64. El Secretario General recomienda que la comunidad internacional:

a) Mantenga un compromiso de principios, coherente y sostenido con la República Popular Democrática de Corea sobre la situación de los derechos humanos;

b) Integre plenamente las consideraciones relativas a los derechos humanos en sus esfuerzos por promover la paz y la seguridad en la península;

c) Facilite un mayor número de contactos interpersonales con ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea que residen fuera de su país para asegurarse de que sus opiniones y aspiraciones puedan contribuir a la colaboración diplomática en cuestiones de derechos humanos;

d) Adopte nuevas medidas para que rindan cuentas los responsables de graves violaciones de los derechos humanos y posibles crímenes internacionales en la República Popular Democrática de Corea, por ejemplo valorando la posibilidad de actuar en virtud de los principios aceptados de la jurisdicción extrajudicial o universal, en consonancia con el derecho internacional, o colaborando y facilitando información al registro del ACNUDH;

e) Reconozca la existencia de graves violaciones de los derechos humanos, que también podrían constituir crímenes internacionales, y tome medidas inmediatamente para poner fin a dichas violaciones, entre otras cosas demostrando voluntad y capacidad para llevar a cabo investigaciones independientes e imparciales de las violaciones denunciadas y exigir a los responsables que rindan cuentas;

f) Apoye las iniciativas dirigidas a aplicar la rendición de cuentas en el plano no judicial, como la reparación, el relato de la verdad y la memorialización, para ofrecer una reparación tangible a las víctimas;

g) Amplíe la protección a los ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea que hayan cruzado fronteras internacionales de forma irregular y a las personas que se hayan fugado de destinos laborales en el extranjero, y garantice que no sean repatriados por la fuerza, de acuerdo con la prohibición absoluta de devolución que establece el derecho internacional de los derechos humanos;

h) Adopte medidas para minimizar las consecuencias humanitarias adversas no intencionadas de las sanciones impuestas a la República Popular Democrática de Corea, permitiendo que los actores humanitarios y de desarrollo participen en programas que mejoren la resiliencia y reduzcan las necesidades humanitarias en relación con las crisis alimentarias y los desastres, y que faciliten el suministro de alimentos, medicinas y atención sanitaria a nivel nacional.
